



## **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

### **SALA LABORAL**

Medellín, abril 18 de 2024

Radicado: 05001- 31- 05-007-2023-00043-01

Demandante: HEREDEROS DE HÉCTOR DE JESÚS MINTES GONZÁLEZ

Demandados: COLPENSIONES,

Tema: EJECUTIVO- RELIQUIDACIÓN PENSIONAL

La Sala Quinta de decisión, integrada por el Dr. DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN como magistrado ponente y la magistrada LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, sin el acompañamiento de la Dra. SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE dado el impedimento que presenta, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, estando acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado.

Pese a que en providencia anterior se estableció que el conocimiento del asunto correspondía a otra sala de decisión, se identifica que no es tal la situación y se reasume la decisión del caso.

### **ANTECEDENTES**

La abogada Johana Cuellar Toro anunciándose como apoderada del finado Nelson de Jesús Montes González quien falleció el 22 de febrero de 2022 y ahora apoderada de los herederos de aquel, sus hermanos José Gamaliel, Rosalba y Cenelly Montes González acude al trámite ejecutivo para obtener de Colpensiones el reajuste de la mesada pensional que se ordenó en sentencia del 30 de julio de 2010 emitida por el Juzgado Segundo Adjunto al Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, donde se estableció que para efectos del reconocimiento pensional habrían de acumularse el tiempo de servicio para el Municipio de Caldas, con el pago del mayor valor en las mesadas desde el 6 de marzo de 2006 al 22 de febrero de 2022, fecha esta última de fallecimiento del pensionado (archivo N° 7- primera instancia).

El despacho de conocimiento en auto del 26 de abril de 2023 rechazó la acción, señalando que no se cumplen con los presupuestos del trámite de ejecución, argumentando que la abogada Cuellar Toro no cuenta con poder para actuar en esta causa.

Para arribar a tal conclusión realizó un recuento de las actuaciones surtidas, que consistió en un proceso previo de radicado 007-2010-00361 que ordenó a Colpensiones computar los tiempos de servicio para el Municipio de Caldas para efectos de calcular la prestación, sentencia emitida el 30 de julio de 2010.

También se hizo alusión a la demanda que se radicó en el año 2017 donde esta abogada (Johana Cuellar Toro) reclamaba el reajuste de la prestación con una tasa de reemplazo del 90%, más los intereses de mora, proceso surtido bajo el radicado 003-2017-00778 en el que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín emitió sentencia del 10 de septiembre de 2018, pero que dentro del trámite de apelación, con providencia del 15 de julio de 2022 la Sala Sexta del Tribunal Superior de Medellín, declaró la nulidad de todo lo actuado, bajo la premisa que el reajuste pensional pretendido ya había sido discutido y declarado en proceso previo y por tanto lo adecuado era encauzar las diligencias por el trámite de ejecución y remitirlo al despacho que conoció del proceso primigenio.

Bajo estas condiciones, razonó la falladora de instancia que la abogada Johana Cuellar Toro no tiene poder para adelantar esta acción ejecutiva en tanto Nelson de Jesús Montes falleció previo a la declaratoria de nulidad antes advertida, además que el contrato de mandato suscrito con el finado lo fue para la representación dentro del proceso ordinario laboral, no así el ejecutivo, donde obran como parte activa los herederos del finado, por lo que no pueden aplicarse las premisas del artículo 76 del CGP.

Así las cosas, sin que la obligación que se pretende ejecutar se halle en cabeza los que eventuales herederos, rechazó la demanda ejecutiva instaurada.

Inconforme con la decisión, la activa presentó recurso de apelación señalando que el artículo 68 del CGP señala la sucesión procesal, que en este caso obra en favor de los herederos determinados; mientras que el artículo 77 del CGP permite que el poder se

extienda a las actuaciones posteriores consecuencia de la sentencia, que corresponde a esta ejecución.

### **ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 la activa presentó escrito donde reitera los argumentos de apelación, además expone que la señora CENELLY MONTES GONZALEZ, de hermana del finado NELSON DE JESUS MONTES le otorgó poder para adelantar la ejecución.

### **CONSIDERACIONES DE INSTANCIA**

De acuerdo a las pruebas aportadas al proceso, y las actuaciones que anteceden se tiene que, contrario a lo indicado por la falladora de instancia, la abogada Cuellar Tobón está habilitada para proponer la ejecución de las condenas que se emitieron dentro del proceso de radicado 007-2010-00361, como pasa a indicarse:

En la acción instaurada el 22 de septiembre de 2017 a la que se le asignó el radicado 003-2017-00778 a través de la abogada Johnana Cuellar Toro, el señor Nelson de Jesús Montes González accionó a Colpensiones pretendiendo el reajuste de la pensión de vejez, para que su valor tuviera en cuenta las condiciones del Decreto 758 de 1990, esto es una tasa de reemplazo del 90% con un IBL que, conforme se había definido en el proceso 007-2010-00361 habría de computar además de las cotizaciones al ISS, el tiempo de servicio al Departamento de Caldas.

Acción en la que se emitió sentencia de primera instancia el 1° de septiembre de 2018 admitiendo las súplicas del actor; luego interpuesto el recurso de apelación se dirigió el trámite a esta corporación, empero en providencia del 15 de julio de 2022 se declaró la nulidad e indicó:

### **II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la documental aportada con el escrito de demanda, toda vez que en momento anterior a la formulación de la demanda ordinaria ya se había emitido sentencia declarativa en torno al derecho debatido, era procedente que el A-quo al estudiar el escrito de demanda y sus anexos, bien rechazar por competencia el proceso al no haber sido él quien profirió la sentencia del proceso ordinario, bien en primer lugar ordenar la adecuación del escrito de demanda y trámite deprecado a los propios de un proceso ejecutivo y posteriormente declarar su incompetencia.

Implicó lo anterior una vulneración al debido proceso y derecho de acceso a la justicia de la activa y posteriormente de la pasiva, por no haberse impartido el trámite correspondiente a la demanda, por el juez competente para ello, debiendo garantizarse el ejercicio de ambos derechos, a fin de materializarlos, máxime que lo pretendido en la demanda refiere directamente a la prestación pensional de vejez de la cual disfruta el demandante.

Y así concluyó:

**RESUELVE**

**PRIMERO. Efectuar control de legalidad**, declarando la nulidad de todo lo actuado en el proceso ordinario laboral promovido por Nelson de Jesús Montes González contra Colpensiones, desde el auto admisorio de la demanda inclusive.

Se ordena notificar por estados y devolver el expediente al despacho de origen, para lo de su cargo.

Los Magistrados

En cumplimiento a esta orden, el Juzgado 3° laboral del Circuito de Medellín, procedió a remitir las diligencias al juzgado 7° laboral del Circuito de Medellín.



**JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**

Veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

RADICADO 2017-778 ORDINARIO

Dentro del presente proceso **ORDINARIO LABORAL** promovido por **NELSON DE JESUS MONTES GONZALEZ** contra **COLPENSIONES**, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Sexta de Decisión Laboral del H. Tribunal Superior de Medellín y efectuado un nuevo estudio de la demanda, se advierte que el competente para su conocimiento es el **JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN** y en consideración con lo anterior, se ordena **REMITIR** el presente proceso a dicho Juzgado para que avoquen su conocimiento y trámite.

Así las cosas, no le era dable a la falladora del despacho receptor cuestionar la remisión del proceso, como tampoco entender que se trataba de una acción independiente a aquella iniciada desde el año 2017, en tanto como lo indicó este tribunal en providencia de julio de 2022, correspondía en aquella oportunidad adecuarla al proceso ejecutivo.

Así las cosas, en el proceso operaron dos fenómenos a saber a sucesión procesal y la pervivencia del mandato, así:

Señala el artículo 68 del CGP que ocurrida a muerte de uno de los litigantes el proceso habrá de continuar, entre otros sujetos con sus herederos, que en este caso lo son aquellos que se reputan como hermanos del pensionado fallecido, quienes además de alegar tal condición adosaron los registros civiles de nacimiento con lo cual pretenden demostrar el parentesco.

Y si bien la norma habla de continuar el proceso, pese a que inicialmente se hubiere presentado un trámite declarativo, se explicó con suficiencia las razones de la mutación del trámite ordinario al de ejecución, por tanto, ha de entenderse que la acción que ahora se cuestiona, tuvo su génesis en septiembre de 2017 y aún no se tiene una decisión definitiva.

Luego, referente a la pervivencia del poder, incorrecta fue la consideración de la falladora de instancia, en tanto la muerte de Nelson de Jesús Montes previo a la decisión de nulidad no puso fin al mandato, así se advierte del artículo 76 del CGP al señalar *“la muerte del demandante o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores”* pues una vez más se indica, la acción ejecutiva se gestó desde el año 2017, en tal momento era deber del Juzgado 3° laboral del Circuito de Medellín haber emitido los correctivos necesarios.

Así las cosas, el mandato otorgado a Johana Cuellar Toro sigue indemne, máxime que quienes ahora se reputan como herederos no han hecho uso de la facultad de revocatoria del poder y por el contrario CENELLY MONTES GONZALEZ, refrendó tal mandato.

En suma, sin que la lectura e interpretación que el juzgado hace de las actuaciones previas se ajusten a la declaratoria de nulidad, además de desconocer las premisas legales relativas a la sucesión procesal y la pervivencia del mandato judicial, será revocada la decisión del 26 de abril de 2023.

En su lugar se impone a la falladora de instancia realizar un análisis de las condiciones para el mandamiento de pago, teniendo presente que el título base de recaudo corresponde a las decisiones emitidas dentro del proceso de radicado 007-2010-00361 y la legitimación por activa de aquellos que se reputan como herederos del finado

Nelson de Jesús Montes González está dada por la sucesión procesal de que trata el artículo 68 del CGP.

Sin costas en esta instancia se remite el expediente al juzgado de origen para dar trámite al proceso ejecutivo.

### DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA** de forma total la providencia recurrida, en su lugar, el Juzgado Séptimo laboral del Circuito de Medellín, deberá:

**PRIMERO:** Estarse a lo dispuesto en la providencia del 15 de julio de 2022 de esta corporación que declaró la nulidad de lo actuado en el proceso de radicado 003-2017-00778

**SEGUNDO:** Verificar la procedencia de la orden de mandamiento de pago, teniendo como premisas: el título base de recaudo corresponde a las decisiones emitidas dentro del proceso de radicado 007-2010-00361 y la legitimación por activa de aquellos que se reputan como herederos del finado Nelson de Jesús Montes González (Artículo 68 del CGP)

Sin costas en esta instancia, lo resuelto se notifica por estados

Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**

*Sin firma por impedimento*

**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso: Ejecutivo  
Radicación: 05001-31-05-007-2023-00043  
Demandante: Herederos de Héctor de Jesús Montes González  
Demandado: Colpensiones  
Procedencia: Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín  
Magistrado ponente: Dr. Diego Fernando Salas Rondón  
Asunto: Declara Impedimento

Medellín, dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Pasado el presente expediente al Despacho por el señor Magistrado Sustanciador, Dr. Diego Fernando Salas Rondón, para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte ejecutante, frente al auto proferido el 26 de abril de 2023, se advierte que procede declarar la existencia de impedimento para integrar la Sala, que debe conocer de este proceso, con fundamento en el numeral 2º artículo 141 del código General del proceso, que establece

“Son causales de recusación las siguientes:

...

2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.

***FUNDAMENTO DE LA CAUSAL***

Como se evidencia en el expediente, el proceso es de conocimiento en primera instancia del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, dependencia en la

cual la suscrita en calidad de Juez Séptima Laboral del Circuito de Medellín, cargo que desempeñé en propiedad desde el 01 de diciembre de 2011 hasta el 28 de febrero de 2019, en atención a ello, se efectuó actuación el 24 de febrero de 2014 (pág.243), en el trámite del proceso ordinario que fundamenta la ejecución, por lo tanto, se materializa una causal de recusación que impone la declaratoria del impedimento, en los términos del artículo 140 del Código General del Proceso.

La Administración de justicia tiene como uno de sus más caros atributos la imparcialidad del juzgador, que lo sitúa frente a los hechos debatidos, como tercero sin interés ni prejuicio.

Sobre esta cualidad del juzgador, garantía del debido proceso, la Corte constitucional, en sentencia C450 de 2015, reiteró:

*“La jurisprudencia de esta Corporación ha valorado el principio de imparcialidad como elemento esencial para la existencia del juez. La Corte ha puntualizado que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial se orientan a proteger los principios esenciales de la administración de justicia y forman parte del debido proceso, en cuanto el artículo 29 Superior resguarda “la observancia de la plenitud de las formas de cada juicio”, sirviendo como fundamento además del régimen de impedimentos y recusaciones. Igualmente, instituciones como el principio del juez natural, la adscripción de competencia, y las reglas de reparto, también se orientan a salvaguardar la imparcialidad de los funcionarios judiciales”*

Sobre el alcance de esta disposición, que corresponde en su contenido al anterior numeral segundo del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, el Consejo de Estado en sentencia de julio 10 de 2014, dentro del proceso radicado 760012331000200800481-01, señaló

*“La causal a que alude el numeral 2º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil se fundamenta en el respeto al principio de la doble instancia, cuando esta procede, el que por demás forma parte del debido proceso y tiene por finalidad impedir que el mismo juez que ha conocido en la primera instancia intervenga en la segunda, juzgando su propia actuación.*

*Para el efecto, debe tenerse en cuenta que la labor de la segunda instancia consiste en verificar, sobre la base de la decisión impugnada, el acierto o el error del a quo en el juicio realizado; en otras palabras, en establecer si el material fáctico y jurídico incorporado al*



*proceso ha sido correctamente valorado y la decisión ajustada a derecho. De donde se colige, que el conocimiento que inhabilita legalmente al juez para un pronunciamiento dentro del proceso está referido a la manifestación de un criterio concreto sobre el asunto de fondo, o el sentido en el que debe resolverse lo que es materia de debate.*

En este mismo sentido se pronunció la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de enero de 2010 con ponencia de la Magistrada RUTH MARINA DÍAZ RUEDA.

*'Al respecto ha puntualizado la Corte que para que se estructure dicho motivo se requiere que la actuación que debe examinar "hubiere tenido una instancia anterior, cuyo conocimiento haya estado a cargo del mismo Juez de la instancia superior y que se trate obviamente del mismo proceso pues la causal persigue, como se desprende nítidamente de su redacción, garantizar la imparcialidad judicial en las diferentes instancias y en el recurso de casación, en un mismo asunto. así que es posible para el juez conocer de otros procesos no obstante que tengan relación con el anterior, sin que se estime afectada su imparcialidad"*

En armonía con lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala Quinta de Decisión Laboral.

**RESUELVE:**

**1.- DECLARARSE IMPEDIDA** para integrar la Sala de conocimiento en segunda instancia del presente proceso ejecutivo, con sujeción de la causal prevista en el numeral 2º del artículo 141 del código General del Proceso.

**2.- DEVUELVA** el expediente al Magistrado Ponente, doctor **Diego Fernando Salas Rondón**, para que decida sobre la aceptación del impedimento.

**CUMPLASE**

  
**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada